

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501520170055801, promovido por la señora **LUZ EDILMA HERNÁNDEZ TEJADA** contra **COLFONDOS, SOFÍA MUÑOZ BEDOYA Y SARA ANDREA MUÑOZ BEDOYA**, con el fin de conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **254**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, la señora Luz Edilma Hernández, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su compañero permanente del señor Juan Guillermo Muñoz Álvarez desde el 28 de junio del año 2016, con los intereses moratorios a los que hubiere lugar.

Como fundamento fáctico de lo pretendido, indicó que, convivió con el señor Muñoz Álvarez desde el 10 de marzo del año 2009 hasta el momento de su fallecimiento el 18 de junio del año 2016. Que el finado mediante declaración juramentada expuso que convivió en unión libre y hasta el año 2009 con la señora Giovanna Andrea Bedoya Puerta con quien además procreó a las menores Sofía y Sara Andrea. Para el año 2016 el señor Juan Guillermo se trasladó por situaciones de trabajo a la ciudad de Panamá, continuando la relación a distancia y estando allí enfermó y falleció, presentándose a solicitar la prestación consecuente a su muerte las hijas de éste a quien se les reconoció la pensión. Explicó que se le negó la prestación por no acreditar la calidad de compañera permanente. Narró que interpuso los recursos en contra de dicha decisión, pero la negativa no fue modificada.

Admitida la demanda, se integró al litigio como Litis por pasiva a las hijas del causante quienes a la fecha perciben la prestación peticionada, y notificadas todas partes expusieron:

Colfondos, contestó desconocer la convivencia que se predica en el libelo genitor, empero, que realizó la respectiva investigación de cara a establecer la calidad de beneficiaria de la demandante, concluyendo que, no le asistía el derecho pretendido por no acreditar la convivencia. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones de: *“Cumplimiento del artículo 294 del Código sustantivo de Trabajo”*, *“No se acreditó el requisito de convivencia mínimo para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia”*, *“Colfondos SA pagó la pensión de sobrevivencia y el retroactivo pensional a quien solicitó el reconocimiento de la pensión y acredito el derecho como beneficiario”*, *“Quien debe*

responder por el pago de la cuota solicitada con ocasión al retroactivo, son las menores Sara Andrea y Sofía”, “El pago de doble retroactivo afectaría el saldo de la cuenta de ahorro individual, de las menores Sara y Sofía”, “Inexistencia de la obligación”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de la obligación”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, Pago y compensación”, “Prescripción”, “Excepción genérica”.

Por su parte, las menores Sofía y Sara Andrea Muñoz Bedoya, representadas por su madre la señora Giovanna Andrea Bedoya Puerta, indicaron que no es cierto lo enunciado respecto a la convivencia de la demandante con su finado padre. Explicaron que el señor Juan Guillermo Muñoz Arias si viajó a Panamá, pero para dicho momento ya se había separado de la demandante desde hace tres años, y que los pagos que se realizaron por giros a favor de la señora Luz Edilma eran para la manutención de la madre del ahora causante y de ellas. Aclararon que la demandante afilió al señor Juan Guillermo al servicio EMI, con el fin de agilizar el traslado del aeropuerto, puesto que el estado de salud del afiliado era precario. Se opusieron a la prosperidad de las pretensiones e interpusieron las excepciones de: *“Inexistencia del derecho reclamado por la demandante”, “Falta de legitimación en la causa por activa”.*

En **sentencia del dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019)**, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, declaró que a la demandante no le asistía la condición de beneficiaria de la pensión de sobreviviente deprecada, y la condenó en costas a favor de las menores y de la accionada Colfondos. Sustento su decisión, en que se no logró probar los supuestos de hecho narrados en el libelo genitor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Corrido traslado para alegar, Colfondos, petitionó confirmar la sentencia de primera instancia, bajo el argumento que, la parte actora no logró establecer la convivencia de manera continua hasta el momento de la muerte por espacio de

cinco años, pues ello así se concluyó en la investigación administrativa, y que para el momento de su fallecimiento se encontraba domiciliado con su madre y con su hermano. Hizo un recuento de la prueba testimonial arrimada al proceso y de la documental aportada, insistiendo en la ausencia de convivencia de la pareja para la fecha de la muerte, por lo cual, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia.

Peticionó que, si se decide revocar la decisión de primera instancia y se considere que la señora Edilma, si acreditó ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia, se considere bien pagado el retroactivo a quienes acreditaron para ese momento la calidad de beneficiarias. Y de haber lugar a retroactivo alguno, se ordene su pago por parte de las menores que se encuentran recibiendo el 100% de la prestación.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo al grado jurisdiccional de consulta, consiste en determinar si la señora Luz Edilma Hernández Tejada es beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por la muerte del afiliado Juan Guillermo Muñoz Arias, y de ser así, menguar la mesada que a la fecha reciben las hijas del causante, así como la procedencia de intereses moratorios, indexación.

CONSIDERACIONES

El sistema de Seguridad social integral, con el fin de amparar la contingencia denominada “muerte” y salvaguardar así el grupo familiar de la persona que fallece y percibía en el ahora finado parte coadyuvante de los ingresos familiares, reglamentó el reconocimiento de la que denominó “pensión de sobreviviente”.

Para la verificación de tal derecho, es imperativo determinar la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues la norma vigente para la época del hecho funesto es la que, debe aplicarse al momento de dar estudio a la procedencia o no de la prestación.

Reposa en la foliatura registro civil de defunción que da cuenta de la muerte del señor Juan Guillermo Muñoz Arias, el 28 de junio del año 2016. En el proceso se encuentra acreditado que el señor Juan Guillermo Muñoz Arias dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivencia para sus afiliados, pues desde el 13 de octubre del año 2016 se reconoció la pensión a las hijas Sofía y Sara Andrea Muñoz Bedoya.

Teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del afiliado, se encontraba vigente la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003 que, respecto a la calidad de beneficiarios de la prestación, indicaba:

“ARTÍCULO 13. Los artículos [47](#) y [74](#) quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

*c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes **y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno**; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo [38](#) de la Ley 100 de 1993;*

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente **de forma total y absoluta** de este;*

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

PARÁGRAFO. *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”*

Es importante precisar, que este articulado ha sido objeto de numerosas explicaciones sobre el alcance de lo que el legislador ambicionó proteger, bien por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional.

En sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018, la Honorable Sala Laboral unificó sus sub reglas respecto del alcance hermenéutico del artículo, sobre los requisitos que debe cumplir el cónyuge o compañero permanente, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes. La importancia de la sentencia radica, en que estimó que el elemento que da vida al derecho es la convivencia, que inexorablemente debe ser de 5 años, como mínimo, sin hacer distinción sobre la calidad del causante, bien pensionado como afiliado, y delimitó la noción de convivencia así:

“Comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”.

En sentencia SL 1730 de 2020, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que el requisito mínimo de convivencia de cinco (5) años, debía entenderse exigible solamente en el caso de la muerte de pensionado, pues la norma, no traía ese requisito para el caso del afiliado. Sin embargo, la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación a la luz de la constitución, en sentencia SU 149 de 2021 indicó que en la sentencia SL 1730 de 2020 la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional, así como el precedente judicial aplicable que no era otro que lo establecido en Sentencia SU-428 de 2016, para lo cual debió cumplir con cargas argumentativas que brillaron por su ausencia, al no exponer las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, pues desde la sentencia C-336 de 2014 la Corte Constitucional fue clara en indicar la igualdad de requisitos respecto a pensionado y afiliado en cuanto a convivencia se refiere, siempre afirmando la necesidad de ser *“parte del grupo familiar de quien fallece”* para acceder a la prestación, bajo la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo en sentencia SU 108 de 2020 explicó los elementos probatorios que deben estar presentes cuando se estudia la convivencia, pues puede darse el caso, que los cónyuges o compañeros permanentes no puedan cohabitar el mismo lugar, sin que ello rompa la convivencia de la pareja, pues en cada caso habrá de estudiarse las condiciones que dieron origen al rompimiento material. Esta precisión ha sido avalada por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En cumplimiento a lo expuesto es claro, que el requisito predominante para adquirir el derecho a la pensión de sobreviviente a la Luz de la sentencia SU 149 de 2021, sigue siendo la convivencia, que en caso del afiliado y del pensionado deberá ser de cinco años, pues siendo un criterio de raigambre constitucional, su aplicación es obligatoria de cara a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

En el caso que nos ocupa, y encontrándonos precisamente dentro del literal a) del artículo 47 ya enunciado, la aquí demandante debe acreditar haber convivido con el causante los últimos cinco años anteriores a su deceso, es decir, haber convivido por lo menos, desde el 18 de junio del año 2011 y hasta el 18 de junio del año 2016.

Sea lo primero indicar por esta Sala de decisión, que en lo que respecta a la acreditación del requisito de convivencia para acceder a la prestación derivada por muerte, la valoración de los medios probatorios debe realizarse de manera armónica, pues es claro que cada uno de los sujetos procesales incorpora al plenario distintos medios de convicción, algunos que se contradicen entre sí, pero esta precisamente en las manos del juzgador extraer aquello que, llena su convencimiento, como la memoria episódica de los declarantes, las razones de sus dichos, la espontaneidad y claridad en sus exposiciones todo de cara a los documentales de prueba.

Para ello entonces, la parte solicitante debe exponer aquello que brinde un mínimo de convencimiento judicial que forme una decisión argumentada, claro está, en toda la prueba arrimada al plenario. En atención a eso, el derecho

reclamado solo será concedido en la medida en que se demuestre en convencimiento de lo que con fuerza se asevera en el libelo genitor, pues no solo debe indicarse la calidad de compañera permanente y la convivencia efectiva, sino, crear la certeza de ello, de no ser así, de dejar una duda razonable al juzgador, la consecuencia lógica será la negativa de lo petitionado, como lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4060 de 2019:

“Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Corolario de lo anterior, si el demandante no asume la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se demostró”

Revisada toda la prueba aportada en el plenario, resaltan por su importancia:

- La señora Luz Edilma Hernández Tejada se encontraba afiliada en calidad de beneficiaria del señor Juan Guillermo Muñoz en calidad de compañera permanente.
- Declaración extrajuicio del señor Juan Guillermo Muñoz Arias realizada el 11 de febrero del año 2011 ante la Notaría Segunda del Circulo de Bello, donde indicó: *“Que conviví en unión libre con la señora GIOVANA ANDREA BEDOYA PUERTA durante 9 años hasta el mes de diciembre de 2009 en que se dio por terminada la relación. En la actualidad no tenemos ninguna relación marital de hecho ni convivimos bajo el mismo techo.”*

- A la demandante le fueron realizados por el causante 3 giros desde la ciudad de Panamá así: \$883.527 (2016/04/18) \$1.985.872 (2016/05/10) \$1.707.698 (2016/05/25).
- Para el 4 de octubre del año 2011 el señor Juan Guillermo Muñoz Arias estuvo internado en la fundación Descubrir, con el fin de iniciar proceso de rehabilitación que no culminó, siendo acompañado por su *“esposa o compañera sentimental”* Luz Edilma Hernández.
- Los señores Hernán Alonso Muñoz Chaverra, Nelly de Jesús Martínez Ríos y María Alejandra González Acevedo, expusieron en declaración extrajudicial ante la Notaría Segunda del círculo de Bello, que conocieron al señor Juan Guillermo Muñoz Arias, quien tuvo dos hijas, y al momento de su muerte vivía con su madre y con un hermano.
- Registro civil de nacimiento de la joven Sara Andrea Muñoz Bedoya, hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2004 y de la joven Sofía Muñoz Bedoya el 3 de marzo del año 2010, ambas hijas de Giovanna Andrea Bedoya Puerta y Juan Guillermo Muñoz Arias.

En la investigación administrativa realizada por la empresa CONSULTANDO LTDA, la aquí demandante expresó:

“Empezamos a convivir a finales del 2009, no, exactamente en el mes de marzo de 2010, porque él convivió con GIOVANNA hasta diciembre de 2009.”

PREGUNTADO: Durante el tiempo en que ustedes convivieron se produjeron separaciones? Si, nos dejamos en diciembre de 2014, porque él tomaba mucho y se fue para donde la mamá, pero al otro día estaba acá, nos dejamos máximo por dos días, no pasábamos de ahí.

Igualmente, se entrevistó al vecino Damián Gallego Arango, quien expuso que conoció al finado viviendo con la aquí demandante en el año 2010. La señora Lucelly Molina vecina, expuso que conoció a la pareja en el año 2013, que el salía en la mañana y llegaba en las noches. La señora Ligia Ramírez lo veía cada 8 días, no sabe si sería por trabajo o porque vivía en otra parte. Elvia López De

Mesa, vecina, indicó que los conoció en el año 2011, y de ahí se fueron para otro lugar.

El padre del afiliado fallecido indicó que vivía con Edilma hace 6 años, pero que era muy inestable y se la pasaba entre la casa de la mamá y la casa de ella.

Así mismo, se entrevistó al amigo del afiliado señor Hernán Alonso Muñoz Chaverra, quien expuso que el señor Juan Guillermo vivía con su madre y su hermano.

En este punto debe explicar la Sala, que la convivencia no es solo la cohabitación de dos personas, o la simple interacción sentimental. Convivencia, definida jurisprudencialmente, se trata precisamente de:

“Comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”.

Ello quiere decir, que, la vida en pareja como tal, corresponde a esa intención de compartir ideales, construir futuro, apoyarse emocional y económicamente sin que los inconvenientes temporales cesen ello, pues en providencia SI 803 de 2022 se aclaró:

“Conviene además recordar que el hecho de que los cónyuges tengan domicilios diferentes ello no es determinante para concluir que entre ellos no existió una verdadera comunidad de vida, puesto que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general, el acompañamiento espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los compañeros finalizar su unión marital, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una

separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar (CSJ SL 12029-2016).

Y es que la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio (CSJ SL 3813-2020).

Existe una singular comunidad de vida en la convivencia de una pareja que debe ser evaluada bajo los aspectos particulares y circunstanciales de sus integrantes, de tal manera que es la real vocación de permanencia en este caso lo que debe prevalecer, el deber de asistencia y acompañamiento, así como la voluntad y la proyección de vida juntos, lo que no necesariamente impide que existan discusiones, desacuerdos que impliquen distanciamientos temporales.

Sin duda, en el caso concreto se trata de una pareja que convivió durante más de cinco años y que si bien se encontraba separada al momento de la muerte, pues el causante se encontraba visitando a su madre y teniendo ciertos altercados con la demandante, ello no indica que estuvieran separados definitivamente o que hubieren culminado su relación, puesto que continuaba el vínculo como pareja y la vocación de ayuda, apoyo y permanencia.”

No puede dejarse de lado que el señor Juan Guillermo Muñoz Arias, contaba con una situación especial, en atención al impacto que el licor tenía en su vida, con lo que, los testimonios recibidos deben valorarse con mayor delicadeza, pues respecto al consumo de estas sustancias se ha indicado que es pertinente determinar si las separaciones dadas en la pareja son justificadas o no, es decir, si a pesar de estas el vínculo se mantuvo incólume o feneció, pues en contextos de dependencia a sustancias psicoactivas o al licor como sustancia primaria, el

requisito de convivencia debe valorarse bajo los presupuestos del artículo 53 Superior, ello, en atención a que, si el presunto beneficiario en calidad de co-dependiente de una adicción ha sido sometido a maltrato físico o psicológico”, no es posible negar la convivencia *“por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges”*, pues así la Sala de Casación Laboral ha explicado que *“en escenarios de este tipo no se puede culpar al consorte víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes”*, máxime cuando *“la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y a la integridad personal”*.

Sin embargo, considera este Juzgador plural, que, si bien el señor Juan Guillermo Muñoz Arias tenía problemas con el licor, situación que se evidencia tanto de la documental como de la narrativa de la testimonial recibida, la señora Luz Edilma Hernández no convivió con éste hasta el momento de su muerte, por el contrario, la relación de pareja que tuvieron feneció desde el año 2014 como se entrará a explicar:

Del interrogatorio de parte recibido de la señora Luz Edilma Hernández, valorado bajo el artículo 191 del CGP, se constata que, conoció al demandante en el año 2010 y no, en el año 2009 que iniciaron convivencia meses después aproximadamente en el año 2011 el mes de marzo, lo cual, tuvo lugar en la casa de la Esperanza del Socorro Arias Téllez. Llama la atención a la Sala, cómo la demandante no supo explicar las razones por las cuales indicó fechas diferentes a las dadas en la investigación administrativa, limitándose a exponer que puso de presente el error al entrevistador, pero aun así firmo su declaración. Dejó claro que los valores girados por el señor Juan Guillermo desde la ciudad de Panamá eran para el pago del arriendo de la casa de la señora Esperanza del Socorro Arias Téllez, la manutención de las menores Sara y Sofía, y el pago de una deuda que el afiliado tenía con su padre. Expuso de una separación en el año 2013. No es posible que a la luz de la labor que dice desempeñaba el afiliado en donde debía viajar a otros Municipios por periodos de varios días y quedarse en “campamentos”, sus vecinos expusieran al investigador que lo veían llegar

“todos los días en la noche”, incluso, uno de ellos, el señor Damián Gallego da fé de una convivencia en fecha anterior a la que la misma demandante acepta.

El señor Uriel Tabares Núñez, amigo de la demandante, expuso que conoció la relación de la pareja, haberlos visitado a razón de su profesión de decorador, y que tenían dificultades como pareja por el alcoholismo del señor Muñoz Arias, quien en cada episodio de disgusto se iba para la casa de su madre. Causa reparo que su versión contradijo lo que aseveró la demandante pues niega que la pareja hubiere convivido con la señora Arias Téllez (madre del causante) Narró que el finado afiliado se ausentaba por periodos largos por el trabajo que realizaba, y que en ocasiones la señora Luz Edilma debía recogerlo alicorado de bares en altas horas de la madrugada. Este testimonio, no expresó con claridad las razones de sus dichos, pues se limitó a indicar con vehemencia que sabía la situación que la señora Edilma pasaba con su pareja, y la convivencia de estos por confesiones que la demandante le realizaba. Con su declaración se puede concluir que por lo menos por un periodo temporal, la pareja si sostuvo una convivencia, pero no con certeza hasta el momento de la muerte del afiliado.

El hermano del causante, señor Mauricio Muñoz Arias, narró la convivencia entre el año 2011 y el 2013 pues desde esta última fecha, el señor Juan Guillermo Muñoz Arias habitó de manera definitiva la casa de su progenitora la señora Esperanza Arias Téllez, para lo cual, se adquirieron algunos muebles. Explicó como su hermano tuvo varias compañeras sentimentales, pero que para el año 2014 en el mes de diciembre, presentó formalmente como novia a la señora Edit Nora Aguilar Berrio, quien pasó festividades con ellos, incluso, toda vez que la señora Aguilar Berrio no habitaba la ciudad de Medellín, cuando venía a visitar a su hermano se quedaba en la casa de la señora Esperanza Arias Téllez con él, siendo común que se hospedara allí como novia del causante.

Edit Nora Aguilar Berrio, expuso haber sido amiga del causante desde su niñez, haber conocido que tuvo una relación sentimental con la señora Giovana Andrea Bedoya Puerta hasta el año 2009 fecha en la que interrumpieron la

relación, y, habiéndose separado, procrearon a la menor Sofía Muñoz Bedoya. Dicha exposición es coherente con el registro civil de nacimiento de la menor que data del 3 de marzo del año 2010, y con la declaración extrajuicio realizada por el afiliado, donde expuso la cesación de la convivencia con la madre de sus hijas para el año 2009. Narró que finalmente la pareja decidió terminar la relación, manteniendo un dialogo cordial. Explicó que supo que el afiliado convivió con “una señora” desde el año 2011 hasta el año 2013, pero que dicha relación terminó y el volvió donde la mamá. Comentó como para el mes de diciembre del año 2014, específicamente el día 8 decidió entablar una relación de noviazgo con el afiliado, compartió con él todo diciembre hospedándose con él en la casa de la señora Esperanza Arias Téllez, día en el cual, además, por vía telefónica, el señor Juan Guillermo en respuesta a una de las llamadas insistentes de la señora Luz Edilma le expresó a viva voz que no lo molestara, pues se encontraba con su “novia”. Es con esta declaración que encuentra la Sala claridad en la declaración extraproceso realizada por el demandante el 28 de julio del año 2014 ante la notaría Dieciocho del Circulo de Bello, donde indicó que vivía con la señora Luz Edilma Hernández Tejada, pues para ese momento la relación continuaba de manera intermitente, finalizando totalmente en diciembre del año 2014, sin que escape de la atención de este juez plural, que en la misma manifestación bajo la gravedad del juramento se indicó que para ese momento la convivencia llevaba 5 años y 3 meses, **lo cual, no es posible, pues para ese momento no se habían conocido según los dichos de la misma señora Luz Edilma.**

Igualmente expuso la señora Aguilar Berrio que la relación sentimental perduró hasta la muerte, sin que hubiere existido convivencia alguna.

La señora Francerid Oquendo argumentó que conoció a la pareja, el problema de licor del fallecido, que vivieron un tiempo con la madre del causante, sin embargo, las razones de sus dichos se limitan a conclusiones en atención a lo que le comentaba la señora Luz Edilma, y solo le consta de manera personal y

directa que entre éstos existió una relación sentimental hasta el final de sus días, pues la convivencia y la relación de pareja la infiere.

Por su parte la señora Esperanza del Socorro Arias Téllez madre del causante aclaró que en efecto en el año 2010 aún la pareja conformada entre Juan Guillermo Muñoz Arias y Giovanna Andrea Bedoya se encontraban intentando solucionar sus problemas y por ello viajaron a Tolú como se esgrime en el material fotográfico adjunto como prueba, que la señora Luz Edilma en el año 2011 inicio una convivencia con su hijo que feneció en el año 2013 aproximadamente, pues el temperamento del afiliado no era fácil de entender, y que el lugar de habitación permanente de su hijo era su casa, la cual, además, suplía él en el pago del arriendo y demás, y que en efecto la señora Luz Edilma recibió los envíos del dinero, pues La señora Esperanza no conoce cómo hacer trámites de manera virtual, ni la conversión de dinero en dólares y ella se ofreció a ayudar, pues como fue compañera sentimental de su hijo siempre mantuvieron una relación cordial.

La misma demandante al haber explicado cómo el señor Juan Guillermo quien siempre cumplió con las obligaciones con sus hijas según la pluralidad de testigos, narró que este se giró la suma necesaria para el pago del arriendo de la casa de la señora Esperanza, sin que sea posible, en el margen de los IBC dados en la historia laboral apenas superiores al salario mínimo en pocos periodos, que se sufragaran los gastos de tres hogares: el que ocuparía con la señora Luz Edilma, las obligaciones con sus hijas, y la casa de la señora Esperanza del Socorro.

De la extensa prueba testimonial se constató igualmente, que la señora Luz Edilma Hernández en atención a su ocupación de comerciante viajaba con regularidad a Panamá a surtir de mercancía para vender, por lo cual, su visita al señor Juan Guillermo Muñoz Arias no se dio de manera específica para acompañarlo en su enfermedad, sino, a otros motivos diversos. No se pone en duda bajo ninguna circunstancia que entre la señora Luz Edilma Hernández y el

señor Juan Guillermo Muñoz Arias existió en algún momento una convivencia con la intención de permanencia y cuidado, pero ello, no fue por 5 años ni tampoco se prolongó hasta la fecha de la muerte del causante, pues no fue más allá del año 2014. Sumado a ello, los videos arrimados a la foliatura, sin contexto alguno ni motivo, y que datan de la hospitalización del causante ninguna luz ni certeza arriman sobre convivencia alguna.

Es, así pues, como con todos los elementos probatorios valorados de manera conjunta, puede concluir esta Sala de decisión, que la señora Luz Edilma Hernández Tejada no ostenta la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por la muerte del señor Juan Guillermo Muñoz Arias, por lo que la prestación reconocida a las jóvenes Sofía y Sara Andrea Muñoz Bedoya deberá permanecer incólume.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **18887ae44ec406f0e8290ed831bc293a09915d9fa31aeff31412466cecac7f97**

Documento generado en 10/08/2023 03:20:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>